

# Revista de Ciencias Sociales

# Factores de movilidad social en un sector rural de Colombia

Ríos Obando, José Fabián\*  
Angarita De La Cruz, Bernardo\*\*  
Vargas Taborda, Libardo Carlos\*\*\*  
Azcárate Serrano, Jacinto\*\*\*\*

## Resumen

El artículo presenta el estudio sobre la movilidad social intrageneracional, como fenómeno que dibuja la calidad de vida, en el tránsito de una posición socioeconómica a otra y que ofrece un panorama de comprensión de la pobreza; condición para disminuir brechas de desigualdad. Como objetivo se propone indagar sobre la relación entre factores como actividad laboral, formación académica e ingreso económico, como indicadores de movilidad social intrageneracional. Se realizó un estudio correlacional en 2019, en Pichinde, corregimiento del Distrito de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, Colombia; con una muestra representativa de 89 familias. Se aplicó un modelo de regresión lineal entre las variables que, a partir del coeficiente de Pearson (R), coeficiente de determinación (R cuadrado) y la prueba de Durbin-Watson, permiten comprobar independencia de los errores. Los resultados muestran la no correlación entre las diferentes variables de estudio, concluyéndose que las condiciones de pobreza subyacen a múltiples factores y en donde la movilidad social intra generacional se ve influenciada por variables no asociadas a la relación entre actividad laboral, formación académica e ingreso económico.

**Palabras clave:** Movilidad social; pobreza; bienestar; calidad de vida; desarrollo social.

---

\* Doctor en Administración Gerencial. Docente Investigador del Programa de Finanzas y Negocios Internacionales en la Universidad de San Buenaventura, Cali Colombia. Investigador Asociado Minciencias. E-mail: [jfriosos@usbcali.edu.co](mailto:jfriosos@usbcali.edu.co) ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3846-2983>

\*\* Magister en Educación. Psicólogo. Docente Investigador en la Corporación Universitaria Centro Superior (UNICUCES), Cali, Colombia. Grupo de investigación Construceces – Unirse. Investigador Asociado Minciencias. E-mail: [invangarita@unicuces.edu.co](mailto:invangarita@unicuces.edu.co) ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8055-8300>

\*\*\* Doctor en Administración Gerencial. Docente Investigador en la Universidad La Gran Colombia, Armenia, Colombia. Grupo de investigación Gestión Empresarial. Investigador Asociado Minciencias. E-mail: [vargastlibardocarlos@miugca.edu.co](mailto:vargastlibardocarlos@miugca.edu.co) ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2328-6155>

\*\*\*\* Doctor en Investigación Educativa. Psicólogo. Docente Investigador en la Corporación Universitaria Centro Superior (UNICUCES), Cali, Colombia. Grupo de investigación Construceces – Unirse. Investigador Asociado Minciencias. E-mail: [invazcarate@unicuces.edu.co](mailto:invazcarate@unicuces.edu.co) ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3234-1750>

# Social mobility factors in a rural sector in Colombia

## Abstract

The article presents the study on intragenerational social mobility, as a phenomenon that draws the quality of life, in the transition from one socioeconomic position to another and that offers an overview of understanding of poverty, condition to reduce inequality gaps. As an objective, it is proposed to investigate the relationship between factors such as work activity, academic training and economic income, as indicators of intragenerational social mobility. A correlational study was carried out in 2019, in Pichinde, corregimiento of the District of Santiago de Cali, Department of Valle del Cauca, Colombia; with a representative sample of 89 families. A linear regression model was applied between the variables that, based on the Pearson coefficient (R), coefficient of determination (R square) and the Durbin-Watson test, allow to verify independence from error. The results show the non-correlation between the different study variables, concluding that poverty conditions underlie multiple factors and where intra-generational social mobility is influenced by variables not associated with the relationship between work activity, academic training and economic income.

**Keywords:** Social mobility; poverty; well-being; quality of life; social development.

## Introducción

El corregimiento de Pichinde tiene una vocación territorial de uso de suelo ligada a la reserva forestal, en tanto se encuentra en el parque Nacional Natural Farallones de Cali; por lo mismo, la conservación del territorio debe estar en función de las normas de protección a las áreas de reserva; sin embargo, los suelos se utilizan en actividades que no están en relación con la vocación forestal (Alcaldía Santiago de Cali, 2017).

En la práctica, la tenencia de tierras y su restricción a lo forestal parecen no coincidir, se han sometido a un continuo fraccionamiento para usos, por ejemplo, vacacionales, mientras que sus habitantes, los cuidadores de las tierras, quienes viven en el corregimiento, sobreviven de actividades de cosechas transitorias, como jornaleros o de actividades no propiamente de la tierra. Lo que genera incertidumbre sobre su futuro bienestar y mejoramiento de la calidad de vida a futuro cercano o mediano plazo. En otras palabras, hacia una movilidad social

sustentable y sostenible.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2012), para que haya movilidad, las personas deben tener acceso a oportunidades económicas, a partir de instrumentos eficientes de redistribución y protección social. Por lo tanto, la movilidad social es principalmente una cuestión de equidad o de eficiencia económica, la cual hace parte de un derecho fundamental de la sociedad (Espinoza, Barozet y Méndez, 2013), y que merece ser observada en la realidad de la zona rural Pichinde, para reconocer la confluencia de las variables en la generación de un desarrollo que dé cuenta de las necesidades sentidas de la población.

El corregimiento de Pichinde, ubicado al occidente de Cali, es uno de los corregimientos con menor densidad poblacional en el área rural, el cual presenta múltiples problemáticas de orden social, como una deficiente infraestructura de servicios públicos, educación, salud, aunado a altas tasas de pobreza, debido a pocas oportunidades

laborales (Zeng, 2018). La falta de apoyo estatal, deficientes recursos y baja inversión social, se convierte en caldo de cultivo para que emerjan problemas sociales que amenazan el bienestar social de sus habitantes (Alcaldía de Santiago de Cali, 2008).

El Plan de Desarrollo 2016-2019 de Pichinde hace referencia a que, en 2015, el 9,1% de la población económicamente activa se encuentra sin empleo. En general, el 10% de los hogares considera que los ingresos no son suficientes para cubrir los gastos mínimos y el 90% percibe que los ingresos no alcanzan para hacerles frente. Según el análisis de la Encuesta de Empleo y Calidad de Vida realizada en 2013:

Al calcular la cobertura de los tres servicios públicos básicos (energía eléctrica, acueducto y alcantarillado) en los (...) hogares encuestados de Pichindé, se obtiene un valor de 30%. Este porcentaje es muy inferior al promedio para la ciudad (97%) y para el total de los corregimientos (56.8%). (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, p.68)

Todo lo anterior, representa un escenario adverso social para la población, la cual se ve expuesta a diversas barreras para satisfacer sus necesidades, que constituye un reto en materia de política social. En todo caso, resulta crítico que la información del corregimiento de Pichinde no sea actualizada; lo que hace necesario, desarrollar investigaciones que evidencien algunos aspectos socioeconómicos y que permitan relacionar el bienestar alcanzado como reflejo de la doctrina económica; por ello, es importante indagar sobre la relación que existe entre el nivel de estudio, los ingresos económicos y la actividad que desarrollan, a manera de entender si su articulación permite mejorar la calidad de vida de sus habitantes o bien generar una movilidad social intra generacional hacia arriba.

## **1. Fundamentación teórica**

La movilidad social, entendida como la transición de un sujeto, desde una posición estructural socioeconómica a otra, pretende

estimar, desde indicadores, la transitabilidad humana, que supone intenciones de mejoramiento de las condiciones de vida, de un conjunto poblacional, de modo que se trata de la posibilidad que tienen las personas de mejorar su posición socioeconómica durante el transcurso de su vida con respecto a un punto de partida (Uribe y Ramírez, 2019). Así mismo, "se entiende como la facilidad que tienen los individuos de una comunidad de lograr desplazamientos reflejados en ascensos o descensos en la escalera socio-económica" (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013, p.4).

De acuerdo con Campos-Vazquez, Huerta y Vélez (2012), la movilidad social puede estudiarse desde diversas perspectivas, siendo interés de la investigación, su análisis intrageneracional, como referente de comprensión de la intención de los indicadores de movilidad social, implica el movimiento asociado a los miembros de una misma generación, a través de su vida y que les afecta en su trayectoria laboral. La movilidad social es considerada como un constructo conformado por variables socioeconómicas, que incluyen, condiciones educativas y ocupacionales que inciden en el incremento de ingresos y por esa misma vía, en la calidad de vida de los individuos (Solis, 2018; Boliver, Gorard y Siddiqui, 2021; Henseke et al., 2021).

El espíritu de la movilidad social, es reconocer un cambio significativo en la posición social y económica que ocupa un individuo o un conjunto poblacional, en la sociedad. Resulta clave en las discusiones sobre la movilidad social, comprender la necesidad imperativa de generar una promoción o ascenso vertical (de una clase a otra); toda vez que favorecen la justicia, eficiencia e integración social (Torche, 2014). La evolución de la doctrina económica dio lugar a una estructura de pensamiento, subyacente a un ethos particular a la segunda mitad del siglo XX, el cual motivado por diversas concepciones; como el desarrollo a escala humana, donde Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn (1998) vuelcan la atención, hacia el ser humano como eje dinamizador de la economía, de esta manera su postulado se

centra en considerar que el desarrollo debe girar en torno a las personas.

Del mismo modo, coexisten otras cosmovisiones de sociedad, como las aportadas por Sen (2000), el cual sentó las bases de una nueva economía basada en la satisfacción de las necesidades, la cual ha de dotar al individuo de una serie de potencialidades y capacidades que le restituyan la libertad y capacidad de toma de decisiones, como única posibilidad de eliminar la pobreza. Conforme se fue avanzando en la consideración de factores cualitativos que respondieran a criterios de responsabilidad social, justicia y equidad, fueron avanzando también las preocupaciones concernientes a generar movilidad social, que facilitara la incorporación de más ciudadanos en la clase media, eliminando a aquellos que se encuentran en condiciones vulnerables (Long y Ji, 2019).

Surgen entonces nuevas formas de concebir al progreso social, que enmarcan factores ecológicos, sociales, y económicos, entre otros, los cuales motivaron fuertemente el discurso de economistas heterodoxos. Dichas posturas teóricas fueron cohesionadas en la consolidación de una nueva visión de desarrollo, en el que surge la imagen directriz del "desarrollo humano", entendiéndose el desarrollo como una orientación hacia el mejoramiento de condiciones que, en palabras de Martínez (2017), "en su origen histórico, el término "desarrollo" se refiere a la situación que logra un país cuando consigue salir de la pobreza" (p.37).

Es manifiesto que, dentro del marco establecido para el desarrollo humano, se integran los desafíos sociales como eje determinante y orientador de consideraciones económicas, haciendo un llamado para alentar a la participación de la sociedad civil, de forma tal que se generen acciones holísticas que garanticen niveles óptimos de bienestar (Sastré, 2018). El desarrollo humano formula un elemento de carácter normativo a considerar y es el hecho que el instrumento más eficaz y oportuno de elección social es conjugar una libertad real que permita seleccionar a cada quien los proyectos de vida, dotando al

hombre de todas las herramientas necesarias para poder llevarse a cabo, bajo principios de equidad y justa distribución, cuyo fin esencial es promocionar el bienestar general (Raudino y Poletti, 2019; Oso, Dalle y Boniolo, 2019).

Por lo anterior, un criterio relevante del desarrollo humano consiste en evitar la exclusión social y la exclusión laboral de las juventudes, entendiendo que esta población juega un papel importante en el desarrollo económico. Castro, García y López (2019), sostienen la importancia de abordar la exclusión social juvenil, como una forma de mitigación del desempleo y con ello, la generación de desarrollo económico y social.

El nuevo estilo de desarrollo multidimensional tiene como fin el llevar a cabo una política contra la pobreza, la educación y la inclusión laboral, por una sociedad más justa y participativa en pro de garantizar el respeto por los derechos humanos, la dignificación del hombre y la consolidación de las diferentes instituciones, en la búsqueda de construir ciudadanía apuntando a proyectos con alto contenido social, que coadyuven al mejoramiento de la calidad de vida (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2018).

En ese sentido, resulta clave apostar al desarrollo de políticas incluyentes, que giren en torno a variables multisectoriales, como empleo, vivienda, entre otras, lo cual da cuenta de una acertada agenda macroeconómica, que puede mitigar de manera efectiva los choques externos, los cuales particularmente inciden de manera negativa, en el nivel de ingresos de la población (Nabudere, 1997; Díaz et al., 2021).

Dicho escenario da cabida a las discusiones como la justicia e igualdad social, la cual puede ser estudiada desde diferentes tradiciones disciplinares y que, desde la perspectiva económica, el bienestar se equipara con ingresos y riqueza (Solis, 2018). Por tal razón, es consecuente que los estudios sobre movilidad social sean abordados desde esta perspectiva; sin embargo, se ha logrado comprobar en otros estudios que el bienestar social debe ser observado desde una visión multidimensional (Grusky y Kanbur, 2006;

Alkire y Santos, 2010), lo cual motiva a que la movilidad social recoja esa misma mirada.

A efectos de la investigación desarrollada, la movilidad social se estudia desde tres variables: Educativa, ocupacional y económica (Jiménez, 2018). La literatura sugiere que para apuntalar a la movilidad social y lograr un desarrollo social, la construcción de políticas debe integrar medidas preventivas contra la pobreza, capacitar continuamente a la fuerza laboral y fortalecer el mercado de trabajo (Zahra et al., 2018; Schoon, Burger y Cook, 2021; Adamecz-Völgyi, Henderson y Shure, 2021). La igualdad y la inclusión social apuntan a resolver las problemáticas que subyacen al desarrollo económico y social, en aras de incrementar las capacidades humanas a nivel intra e inter generacional (Sen, 2000).

Se considera entonces que el estudio sobre la movilidad social intrageneracional en dichas variables, es un insumo valioso para valorar la incidencia de la desigualdad de oportunidades (Solis, 2018). Las dinámicas de desarrollo social apuntan precisamente a defender la justicia social, mediante la erradicación de la pobreza y otras prácticas multidimensionales, como una apuesta para eliminar la marginación y la exclusión social (Lombard y Twikirize, 2014; Araya, 2019).

De lo anterior, el Estado debe estar en permanente monitoreo de los aspectos fundamentales de la economía que garantizan la movilidad social, con la intención de generar esfuerzos que coadyuven a alcanzar un desarrollo social en la sociedad. Para alcanzar tan noble fin se requiere humanizar la doctrina económica, en la cual la prosperidad empresarial y el desarrollo sostenible son dos caras de una misma moneda (Margitic y Ravallion, 2019; Rocha, Julio y Semprun, 2021).

Es prudente cambiar el enfoque social que impera en la agenda pública, desde una política asistencialista que poco contribuye a la movilidad social hacia el desarrollo de estrategias de desarrollo productivo, social y de mercado. La cual debe albergar acciones como garantizar una educación pertinente con calidad; promover la innovación y

emprendimiento; fomentar la infraestructura logística para generar competitividad; protección de la biodiversidad; entre otras medidas que den cuenta de la interacción entre factores económicos, sociales y ambientales que brindarán un escenario de desarrollo sostenible (Castro, 2011).

Para enfrentar el problema hace falta romper paradigmas tradicionales y sentar las bases de un nuevo discurso que garantice un desarrollo incluyente que promueva la correcta asignación de recursos hacia las zonas con mayor grado de vulnerabilidad, forjando una infraestructura productiva que dinamice la generación de empleo e ingresos, pero que, por ello mismo, se hace necesario comprender qué tan fuertes o débiles se perfilan los indicadores como comprensión del fenómeno de la movilidad (Bedrunka, 2020). En ese sentido, la movilidad social se plantea como un fenómeno dinámico que posibilita una transformación del tejido social, hacia la maduración de un estado pleno de desarrollo.

Dentro del fenómeno económico observado, persisten problemas recurrentes, como el coeficiente Gini, que sigue en umbrales superiores al 0.50 (Lustig, 2018; Campos-Vazquez et al., 2022), situación que pone de manifiesto una alta desigualdad social que genera interrogantes frente al presunto éxito de la política económica. Por otra parte, en materia de desarrollo social, al observar los resultados de la medición del IDH, según los resultados publicados por el PNUD (2019), Colombia en 2018 ocupó el lugar 95 entre 188 economías; lo cual es resultado poco alentador frente a logros tan importantes como la educación y salud.

En el informe de Oxfam Internacional (2018), se manifiesta que el 1% de las personas más ricas del planeta, acaparen el 82% de la riqueza generada el año pasado, mientras que la mitad más pobre no se benefició en nada. Es decir, que se está hablando de 3.700 millones de personas, que no se beneficiaron en lo más mínimo del crecimiento económico.

Estos datos igualmente los confirman el informe Davos del Foro Económico Mundial (FEM, 2019), donde además se

señala que para el 2017, hubo un incremento de multimillonarios, el más grande en toda la historia. Pero también incrementó la pobreza extrema, para 2018 en América Latina, como lo señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019), a su nivel más alto desde 2008. Lo que es preocupante son las condiciones de vida que se han empeorado en casi todos los países. Para acabar con la pobreza, el informe Davos (FEM, 2019) recomienda:

Entre ellos poner límite a los retornos económicos a los accionistas y altos ejecutivos, salarios mínimos vitales que permita a los trabajadores tener una calidad de vida decente, asegurar que los más ricos paguen una parte justa de los impuestos con medidas contundentes contra la evasión de impuestos e incrementar el gasto público en salud, educación y seguridad social. (p.9)

Para encontrar soluciones sistemáticas a la crisis actual, se debe afrontar un nuevo enfoque con mayor carga social; que dirija las actuaciones de carácter económico, esperando poder desentrañar respuestas a los problemas asociados a la alta pobreza, concentración de la riqueza, entre otros (Brown, Ravallion y Van de Walle, 2018). Se esperan que, en las decisiones de política pública, se reconozca las particularidades de cada territorio, para formular soluciones holísticas que apunten a una verdadera movilidad social (Londono, 2011; Katzkowicz, Querejeta y Rosá, 2021).

La ciudad Santiago de Cali, ha venido experimentado durante los últimos años, tasas de desempleo de dos dígitos, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2020), en el periodo 2018, la tasa de desempleo disminuyó 0,4 puntos porcentuales frente al 2017, pasando de 11,9% a 11,5%. Dicha tasa resulta ser mayor al promedio de las 13 áreas metropolitanas (10,8%).

Dicho escenario siembra una preocupación sobre la dinámica social y económica de la región, evidenciada en el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza monetaria que, según el informe de Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia publicado por el DANE (2018a),

Cali en 2017, tiene una pobreza monetaria del 15,5%, aunque significativamente inferior al total nacional (26,9%), es superior a ciudades como Bogotá (12,4%); Bucaramanga (12,0%) y Medellín (13,4%). Según las cifras oficiales reportadas, en el año 2017, la Población Económicamente Activa (PEA) de Cali, fue de 1,398 (en miles) de personas, de los cuales la PEA desocupada es de 166 (en miles).

En lo que atañe al Coeficiente de GINI, se ha visto una tendencia a la baja en el periodo 2008-2017, al pasar de 0.518 a 0.460; sin embargo, el indicador no es completamente favorable, en tanto que ocupa el noveno lugar a nivel nacional, entre las ciudades más equitativas en la distribución del ingreso en Colombia.

## 2. Metodología

Desde un diseño transeccional, para esta investigación se empleó un enfoque cuantitativo, con un nivel correlacional, puesto que se busca comprobar las frecuencias de variables y compararlas entre sí para establecer relaciones. Se llevó a cabo un modelo de regresión lineal, para establecer la asociación entre las variables socioeconómicas y predecir su influencia en la movilidad social. En aras de ajustar el modelo, se aplicó la prueba de Durbin Watson (DW), para determinar la auto correlación entre los residuos; aplicando los límites de Savin y White (1977). Se presenta el análisis de correlación de Pearson (R) y el coeficiente de determinación (R cuadrado), en aras de determinar la proporción en la variación de los resultados, que pueden ser explicados mediante el modelo.

Se acudieron a fuentes primarias mediante la observación y la aplicación de un instrumento tipo encuesta, con 11 preguntas para la recolección de los datos, con variables nominales y ordinales e incluyen datos sociodemográficos, aplicada directamente en las viviendas, a la persona que se declaró cabeza de hogar. Los datos son de la vigencia 2019. Para el análisis de la información, se usó el *software* SPSS, el cual facilitó el tratamiento

de datos. La consideración de indicadores de movilidad social en Colombia, se enmarca en los referentes de las políticas sociales de Estado, como condicionantes de acciones de justicia, eficiencia y cohesión social para reducir las brechas entre riqueza y pobreza. Asimismo, se consultó fuentes secundarias, particularmente estudios oficiales publicados por los organismos estatales y en revistas de corriente principal.

Para el 2018, Pichinde contaba con 178 viviendas (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2018), de las cuales se abordó 89 familias (50% del total de familias), se trataba de abordar el mayor número posible de familias, pero en muchas no hubo un adulto o no había nadie para responder. Como elementos de exclusión, se consideró que una persona no puede pertenecer a dos núcleos familiares, de forma simultánea.

En relación a la definición de las variables a estudiar, se consideró los aportes de Puga y Solis (2010); Torche (2014); y, Yaschine (2015), quienes argumentan que: La educación (nivel de estudio), nivel de ingresos y tipos de actividad, son elementos clave para lograr una movilidad social intra generacional; se argumenta que a su vez se considera como la hipótesis de la investigación. En ese sentido, se pretende comprobar si en el territorio analizado, los niveles de estudio, la ocupación y los ingresos, son factores para mejorar la calidad de vida.

### 3. Resultados y discusión

Las políticas sociales y económicas de Estado, buscan, al menos en teoría, mantener un equilibrio en la repartición de la riqueza, condición que se sustenta a partir de indicadores objetivados desde una legislación que regula las economías y las acciones sociales en beneficio de quienes cohabitan sus espacios físicos. Bajo esta determinación, la relación actividad laboral, la formación académica y el ingreso económico, como indicadores de movilidad social en un sector rural de la ciudad de Cali (Pichinde), reflejan la transición que

han tenido o que posibilita la trascendencia intrageneracional a mejores expectativas de vida o a condiciones de desmejoramiento.

A continuación, se presentan los *outputs* obtenidos con el programa SPSS del análisis de regresión. Se ha de asumir que el nivel de estudios, como factor de movilidad social, provee a la persona de herramientas, que facilitan la generación de ingresos para su sostenibilidad y la del grupo familiar. Sin embargo, en la Tabla 1, se evidencia que las variables presentan una relación positiva, pero con tendencia baja-medía; sugiriendo, de esta manera, una débil condición, como indicador o factor para la movilidad social.

**Tabla 1**  
**Correlación (R) y regresión lineal simple: Nivel de estudio-Ingreso familiar**

R	R cuadrado	F	B	Durbin Watson
0,436	0,191	303.99**	0,436	1.760

**Nota:** Variable dependiente: Ingreso Familiar. Nivel de significación: \*\*  $p < .01$

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

El modelo entre el nivel de estudio y el tipo de actividad que realiza explica el 77,5% de la varianza, siendo estadísticamente significativo ( $F=405.89$ ;  $p < .01$ ). En ese sentido, el nivel de estudio del cabeza de hogar aporta un 88% en la predicción sobre las actividades desempeñadas.

No obstante, los niveles de estudio de la persona que se asume como cabeza de hogar, así como el tipo de actividad que realiza, supone una alta relación en función de la búsqueda de una mejor calidad de vida (ver Tabla 2). Sin embargo, el hecho que exista una relación entre la actividad que está desempeñando y los niveles de estudio, no es una casualidad, como lo confirma el Durbin Watson, que es de 1.856; como  $D > DU$  (límite superior), que sugiere que no existe autocorrelación entre los residuos.



**Tabla 2**

**Correlación (R) y regresión lineal simple: Nivel de estudio – actividad**

R	R cuadrado	F	B	Durbin Watson
0,88	0,775	405,89**	0,880	1,856

**Nota:** Variable dependiente: Actividad que realiza.  
Nivel de significación: \*\*  $p < .01$

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

Por lo tanto, se observa una buena asociación lineal entre ambas variables; de tal suerte que en la medida que se adquiere niveles de estudio, la actividad desempeñada, tiende a mejorar. Ya Solís (2018), había sugerido que variables como la educación y la ocupación inciden en la calidad de vida de los individuos; también, en el estudio de López (2009), se sugiere una alta correlación entre el estudio y el empleo, por cuanto la formación implica mejor desempeño. Desde esta apreciación, se

ha de entender que la calidad de vida, se logra desde el desarrollo de competencias para la posibilidad de satisfacer necesidades.

De lo anterior, resulta clave reconocer el indicador de pobreza monetaria calculada por el DANE (2018b) en Colombia, entendida como "el costo per cápita mínimo de una canasta básica de bienes (alimentarios y no alimentarios) en un área geográfica determinada" (p.3), puesto que se trata de comprender si la correlación nivel de estudio y ocupación, también apuntan a estar relacionadas con los ingresos, puesto que, de esto, también depende la calidad de vida y con ello, la movilidad social.

Para el 2018, el costo per cápita de una familia conformada por cuatro personas, ubicadas en los centros poblados y rural disperso, es de \$676.740. De acuerdo con la Tabla 3, el 86,51% de la muestra poblacional, se encuentra con ingresos entre \$0 y \$660.000, lo que sugiere que están por debajo de la línea de la pobreza monetaria.

**Tabla 3**  
**Ingreso por grupo familiar**

Ingreso familiar/ Rango	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
0 y 660.000	77	86,51%	86,51%	86,51%
660.001 en adelante	12	13,49%	13,49%	100%
Total	89	100%	100%	

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

Bajo estas condiciones, se ha de señalar que, si bien el 13,49% de los entrevistados, tienen un nivel de ingresos superior a \$660.000 pesos y que, en consideración con el DANE, para el 2018, el ingreso per cápita por familia (rural) es de \$676.740, además que el

grupo familiar, para la población en estudio, la tendencia es de 4 personas por familia, 64% (ver Tabla 4); se puede argumentar que al menos, el 86,51% de este grupo poblacional se encuentra en la línea de pobreza.

**Tabla 4**  
**Composición familiar**

Composición familiar	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Padre-Madre-hijos	57	64,04%	64,04%	64,04%
Un padre-hijos	24	26,96%	26,96%	91,0%
Abuelos-nietos	3	3,3%	3,3%	94,3%
Un padre-Hermano padre-Hijo	3	3,3%	3,3%	97,6%
Padres-Hijos-Abuelos	2	2,4%	2,4%	100%
Total	89	100%	100%	

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

Un porcentaje de familias tan alto en la línea de pobreza evidencia una alta vulnerabilidad de satisfactores de necesidades básicas, lo que implica un retraso en el desarrollo social y económico no solo para el sector, sino para la región y para el país en general. Igualmente implica un esfuerzo en el gasto público para mantener las transferencias monetarias que permitan cubrir la emergencia tanto de necesidades básicas de la gente, como la acción lenta hacia la recuperación de la economía. Ejemplo de ello, se observa con la reciente irrupción social a causa de la pandemia, donde las poblaciones más vulnerables fueron aquellos sectores con altos niveles de pobreza (Comisión Economía para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021).

En función de los indicadores oficiales y complementarios, para medir la pobreza en Colombia (pobreza monetaria y multidimensional), los ingresos por familia sugieren una población que se encuentra en la línea de pobreza. Por otra parte, dos

indicadores dimensionales de la pobreza (condiciones educativas y trabajo), sugieren que los entrevistados carecen de una formación académica que favorezca el acceso a mejores oportunidades, sea en Pichinde o en otro espacio geográfico. En razón a lo expresado en la Tabla 2, al no tener los entrevistados, suficiencia en el nivel de estudio, no pueden acceder a actividades laborales que resulten favorables.

Si bien cada actividad requiere de competencias específicas, con el fin de responder a las exigencias que la dinámica económica, requiere para su sostenibilidad, ello debe estar soportado por los niveles de estudio o capacitaciones que desarrollen las competencias requeridas. En este sentido, la población de Pichinde, muestra niveles educativos -o bien de ausencia de este- en su mayoría de formación hasta primaria incompleta (44,94%); solo el 2,2% del total de los encuestados, manifiestan haber aprobado la secundaria (ver Tabla 5).

**Tabla 5**  
**Nivel de estudio cabeza de hogar**

Nivel de estudio cabeza de hogar	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Primaria incompleta	40	44,94%	44,94%	44,94%
Primaria completa	16	17,97%	17,97%	62,91%
Básica secundaria incompleta	12	13,48%	13,48%	76,39%
Secundaria completa	2	2,24%	2,24%	78,63%
No estudió	19	21,37%	21,37%	100%
Total	89	100%	100%	

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

El análisis estadístico, derivado de la Tabla 6; establece que el 1% de la variación en los ingresos, obedece a cambios en el tipo de actividad que realiza el jefe de hogar. Así pues, la variable independiente, contribuye un 12% ( $\beta = 0,12$ ;  $p < 0.1$ ) en la predicción sobre el incremento de los ingresos del grupo familiar. Es importante tener en cuenta que los valores son estadísticamente significativos. Así mismo, según el Durbin Watson (1.902) no existe autocorrelación entre los residuos.

**Tabla 6**  
**Correlación (R) y regresión lineal simple: Actividad - Ingreso familiar**

R	R cuadrado	F	B	Durbin Watson
,12	,01	5.39**	,12	1.902

**Nota:** Variable dependiente: Ingreso Familiar. Nivel de significación: \*\*  $p < .05$

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

En ese sentido, la escala salarial en Pichinde no está claramente diferenciada, según la actividad económica. Lo anterior tomando en consideración muestras poblacionales con condiciones de formación educativa sin nivel universitario. Aun cuando la actividad desempeñada, guarda una relación directa fuerte con el nivel de estudios, no se puede concebir como un indicador de movilidad social.

**Tabla 8**  
**Vivienda propia**

Tiene vivienda	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Si	48	53,93%	53,93%	51,4%
No	41	46,07%	46,07%	100%
Total	89	100%	100%	

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

Según las metodologías de la medición de la pobreza multidimensional y la pobreza monetaria, en 2018 el costo per cápita mínimo para superar el umbral de pobreza monetaria nacional fue de \$257.433. De esta manera, un hogar conformado por cuatro personas es

Al analizar las dos variables en cuestión (ver Tabla 7); el modelo establece que el 8% de la varianza en la tenencia de vivienda propia está relacionada con el ingreso familiar. Aun cuando los datos son estadísticamente representativos -la prueba de Durbin Watson, revela que no hay autocorrelación entre los residuos-, el R (28%), señala que la relación entre ambas variables es baja.

**Tabla 7**  
**Correlación de Pearson y regresión lineal simple: Ingreso familiar/mes – Vivienda propia**

R	R cuadrado	F	B	Durbin Watson
,28	,08	31.74**	,28	1.750

**Nota:** Variable dependiente: Vivienda propia. Nivel de significación: \*\*  $p < .01$

**Fuente:** Elaboración propia, 2021.

Por lo tanto, no necesariamente la compra de los inmuebles, depende de la capacidad adquisitiva de la población; en tanto que más del 86,51% de la muestra poblacional tiene ingresos en la línea de pobreza; mientras que el 53,93% (ver Tabla 8), tiene vivienda propia. De esta manera, la visión de pobreza debe retomar un carácter multidimensional, que no debe limitarse a la insuficiencia de ingresos.

pobre si el ingreso total del hogar no supera el \$1.029.732 pesos; sin embargo, si la familia vive en los centros poblados y rural disperso es de \$676.740, se presume un menor ingreso, por tanto, se debe considerar aspectos como el IPC (Índice de precios al consumidor) y el

acceso a ciertos alimentos de pancoger, que permite satisfacer en buena medida algunas necesidades, en relación a quienes habitan en las áreas metropolitanas o cabeceras. Para el caso de Pichinde, se puede clasificar como un centro rural disperso.

Al observar los resultados obtenidos por la encuesta, solo doce hogares que representan estadísticamente el 13,49% de la muestra, tienen ingresos superiores a \$660.001. De tal suerte que por lo menos el 87% (77 hogares) de la población de Pichinde no supera el umbral de la pobreza monetaria para 2018 en Colombia. Se debe entender que la "línea de pobreza extrema es el costo per cápita mínimo de una canasta alimentaria que garantiza las necesidades básicas calóricas" (DANE, 2018b, p.3).

Se ha reconocido en múltiples estudios como el de Leibovich, Nigrinis y Ramos (2006); y el del Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo, 2017), que una gran proporción de dichos trabajadores son no asalariados, que no tienen la protección establecida por la legislación laboral; en ese sentido, están expuestos a una alta informalidad, empleos inestables y de baja calidad, que repercuten gravemente en el bienestar de la población. El estudio señalado reconoce que un 60% de la población jornalera percibe como asignación menos de 1 salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), lo cual agrava aún más las desigualdades de dicho segmento poblacional.

Los resultados permiten suponer a partir de las correlaciones entre actividad laboral, formación académica e ingreso económico, que las condiciones de pobreza subyacen a múltiples factores que distan de aspectos monetarios, en donde la movilidad social intra generacional se ve influenciada por otras variables intervinientes no abordadas en la investigación.

En ese sentido, se rechaza la hipótesis de la correlación entre los niveles de estudio, la ocupación y los ingresos como factores para mejorar la calidad de vida, conforme a los postulados de Puga y Solis (2010); Torche (2014); Yashine (2015), en tanto no es posible

asumir una correlación significativa, entre las variables de estudio y su incidencia en el mejoramiento de las condiciones de vida en la población de Pichinde. Del mismo modo, se comprueba que la educación no siempre es un factor para generar movilidad social, como es señalado por Flores-Crespo y Rodríguez-Arias (2021), en tanto que la misma debe ir asociada a la capacidad del Estado y las empresas para consolidar un mercado de trabajo que permita absorber las capacidades de los ciudadanos y garantizar su empleabilidad, en términos de calidad y oportunidad.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la población de Pichinde corresponde a movimientos migratorios de Antioquia y Cauca (Departamentos de Colombia), quizá en la búsqueda de mejores oportunidades de vida, razón que sostiene causas en la dificultad de movilización social. Al respecto, Peláez et al. (2021) manifiestan que el "desplazamiento y la migración, son fenómenos que están interrelacionados, ambos se dan a razón de la búsqueda de una mejor vida" (p.149).

## **Conclusiones**

Si bien, la correlación entre el nivel de estudio y la actividad que desarrolla la población de Pichinde es fuerte y los niveles de ingreso no presentan correlación con las variables ocupación y nivel de estudio, no implica necesariamente una ausencia de interdependencia, más bien sugiere que la población se ocupa en actividades para el pancoger (jornaleros, agricultura de subsistencia, labores domésticas, entre otros), lo que no representaría altos ingresos que les permita una movilidad social hacia arriba.

Sin embargo, hay que entender que los bajos niveles de estudio, junto con el tipo de actividad tienen una alta correlación, aun cuando implique que la persona cambie de actividad laboral, no sugiere mejoramiento salarial, puesto que la población en su generalidad permanece en la línea de pobreza, generándose un bucle permanente que la movilidad social necesita romper para

avanzar a niveles de sostenibilidad social, tanto económica, como en la calidad de vida multidimensional.

El modelo económico imperante, al cual se responsabiliza por su incapacidad para alcanzar un desarrollo social justo, hace necesario configurar un nuevo orden que logre internalizar dentro de las políticas públicas, las crecientes necesidades de la población vulnerable; de forma tal, que la apuesta en materia económica y política gire en torno al mejoramiento de las condiciones de vida de la población; para lo cual debe examinarse a fondo, el impacto de las políticas públicas en variables no solo macroeconómicas, sino también de carácter social, como la distribución del ingreso, el acceso a la educación, que por sí misma comporta la condición de calidad, y salud, entre otras condiciones que garantizan una movilidad social.

No obstante, el sólo acceso a la educación como indicador de movilidad, no es condición misma de su transitabilidad, puesto que ello implicaría que, desde lo público y lo privado, no debe haber diferencias en función de ser garantes para el mercado laboral, cosa que en la práctica se refleja lo contrario. En la población de Pichinde; el 78% de quienes se configuran como cabeza de hogar, tienen algún nivel de educación (aun cuando no haya sido a nivel superior); sin embargo, la relación entre dicha variable y el ingreso familiar no es fuerte; por cuanto, el nivel de estudio contribuye con un 44% en la predicción frente a la generación de ingresos. De este modo, no es posible suponer que, ante una mejora en la educación de los jefes de hogar, se presente un incremento significativo en la renta percibida. De hecho, la investigación revela que sus niveles de ingreso están en la línea de la pobreza y otros en la pobreza extrema.

Lo anterior se ve reforzado por los resultados asociados a la actividad realizada, por el jefe de hogar y la contraprestación económica; toda vez que tan solo el 1% de la variación en los ingresos, obedece a cambios en el tipo de actividad que realiza el jefe de hogar. En ese sentido, se observa que la variable ingresos depende de otros factores

coyunturales y quizás estructurales, que poco tienen que ver con la formación académica; por lo que, para lograr disminuir brechas sociales en la zona rural observada, se deberá considerar diversas externalidades, cuyo origen no hicieron parte de la investigación.

De acuerdo con el DANE un hogar compuesto por cuatro personas en los centros poblados y rural disperso es enmarcado bajo la pobreza extrema, si los ingresos totales mensuales son menores a \$400.164. Para el caso de Pichinde, los resultados indican que de esos 77 hogares que perciben menos de \$660.000 pesos mensuales; el 67,6% (o bien 52 hogares) se consideran que están bajo la línea de la pobreza extrema. Por lo que, se aduce que una porción significativa no cuenta con las condiciones mínimas para lograr sobrevivir (en tanto no cuentan con los recursos suficientes para adquirir la canasta de bienes alimentarios).

De conformidad con la medición de pobreza, según la clasificación ofrecida por Sen en 1981 y valorando el método directo, el cual aborda la satisfacción de una persona con relación a ciertos aspectos vitales como educación, empleo y vivienda; sobresalen algunos datos, como por ejemplo que el 46% de los hogares no tengan vivienda propia; la baja escolaridad de los jefes cabeza de hogar, donde el máximo nivel de estudios observado es secundaria completa, con tan solo el 2,2% de los encuestados. Así mismo, que el 81% de los jefes cabeza de hogar (es decir 72 encuestados), trabajan bajo condiciones de informalidad, lo cual seguramente limita sus posibilidades de acceder a las prestaciones sociales y al sistema de seguridad social. Esto seguramente repercutirá en el largo plazo en una baja tasa de personas que pueden acceder a una pensión.

Lo anterior es evidencia de una baja escolaridad, que en términos sociales y económicos se traduce en una marginalidad, la cual debe ser observada desde las políticas públicas de orden social, en aras de potenciar el nivel de desarrollo de la población.

De acuerdo con los resultados, se observa que en el 64% de los casos, el hogar

está conformado por el núcleo padre- madre e hijos. Esto denota la presencia de hogares funcionales, a diferencia del 27% (24 familias), donde hacen parte del hogar, un padre e hijos. El 31,46% de los encuestados (28 personas), cabeza de hogar, afirman que su actividad económica es ser jornalero. Tradicionalmente el jornalero es aquel trabajador que trabaja por jornales, es decir pago por día de trabajo, en actividades agrícolas.

Al observar los ingresos familiares por mes, al menos un 86% está percibiendo ingresos mensuales inferiores al SMLMV (periodo 2019). Esto da lugar a que una amplia porción familiar tenga un nivel de ingresos que le impide satisfacer las necesidades básicas; siendo representativo que la moda estadística obedezca a hogares con ingresos de doscientos mil pesos (\$200.000). El dato central estadístico (media) revela que, en promedio, el nivel de ingresos mensual familiar es de trescientos noventa y tres mil quinientos cuatrocientos pesos (\$393.400).

Si el nivel de estudio en Pichinde, no es una condición fuerte para el ingreso familiar, se puede cuestionar la hipótesis que la educación es un indicador para mejorar la calidad de vida; de este modo, se puede asumir que la formación académica recibida no es condición *sine qua non* para alcanzar un bienestar.

No obstante, el nivel de estudio tiene una fuerte correlación con la actividad que la persona cabeza de hogar realiza, señalándose con ello, que una persona se siente con mejor calidad de vida en la medida que realiza una actividad acorde con sus expectativas personales. Es imperativo entonces establecer una agenda política, que coadyuve no solo a generar una distribución equitativa de la renta, sino que atienda a otras consideraciones, asociadas a la satisfacción de necesidades de la población y sus distintas expectativas de vida.

Es necesario fijar instrumentos de planeación, los cuales deben encargarse de trazar una visión de largo plazo, como un medio para dar respuesta a los problemas estructurales de la sociedad. Lo anterior se manifiesta en la incapacidad del ente territorial para abordar de forma expedita y coherente

las problemáticas que subsisten en torno a la movilidad social, obstaculizando la posibilidad de consolidar un desarrollo que responda, entre otros criterios, a atender las necesidades de la población más vulnerable.

Dicha desarticulación propicia un escenario que entorpece la solución de problemas, como la atención efectiva a la pobreza, el desempleo, entre otros, y que finalmente, impiden dar respuesta eficientemente a los problemas que han sido diagnosticados repetidamente.

Se está en mora de abordar investigaciones que apunten a considerar nuevas variables de estudio, que permitan mejorar la comprensión sobre la movilidad social; en donde se podría evaluar, entre otras cosas, las áreas de conocimiento o disciplina científica de los trabajadores en la población -identificando las diferencias por ramas de la ciencia-; términos legales de contratación o incluso tipo de empresa a la que se vinculan laboralmente (pequeña, mediana o gran empresa), como posibilidad para generar movilidad intra generacional hacia arriba; o bien analizar las mismas variables y sus implicaciones en términos de movilidad inter generacional, en aras de establecer posibles cambios en las condiciones de vida a largo plazo.

## Referencias bibliográficas

- Adamecz-Völgyi, A., Henderson, M., y Shure, D. (2021). Intergenerational educational mobility – The role of non-cognitive skills. *IZA Discussion Paper*, (14580), 1-27.
- Alcaldía de Santiago de Cali (2008). *Plan de Desarrollo 2008-2011: “Para vivir la vida dignamente”*. [https://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/plan\\_desarrollo\\_cali\\_2008\\_2011\\_primer\\_borrador.pdf](https://www.cali.gov.co/publico2/documentos/planeacion/plan_desarrollo_cali_2008_2011_primer_borrador.pdf)
- Alcaldía de Santiago de Cali (2017). *Plan de Desarrollo 2016–2019: Corregimiento*

- Pichindé. <https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/144515/planes-corregimientos-2016-2019/genPagdoc1570=2>
- Alcaldía Mayor de Bogotá (2013). *Índice de Movilidad Social en Bogotá D. C.* <https://www.sdp.gov.co/transparencia/informacion-interes/publicaciones/estudios/058-indice-de-movilidad-social>
- Alkire, S., y Santos, M. E. (2010). *Acute Multidimensional Poverty: A new index for developing countries.* *OPHI Working Papers* 38. <https://ophi.org.uk/wp-38/>
- Araya, F. (2019). Evidencia sobre la movilidad intergeneracional de ingresos laborales para un país en desarrollo: el caso de Uruguay. *El Trimestre Económico*, 86(342), 265-305. <https://doi.org/10.20430/ete.v86i342.722>
- Banco Interamericano de Desarrollo - BID (2012). *La realidad social: Una introducción a los problemas y políticas del desarrollo social en América Latina. Módulo 1-Pobreza, Desigualdad y Movilidad Social.* BID. <https://indesvirtual.iadb.org/mod/resource/view.php?id=18793>
- Bedrunka, K (2020). Concepts of the Sustainable Development of the Region. In G. Królczyk, M. Wzorek, A. Król, O. Kochan, J. Su y J. Kacprzyk (Eds.), *Sustainable production: Novel trends in energy, environment and material systems. Studies in systems, decision and control*, vol. 198 (pp. 11-18). Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-11274-5\\_2](https://doi.org/10.1007/978-3-030-11274-5_2)
- Boliver, V., Gorard, S., y Siddiqui, N. (2021). Who counts as socioeconomically disadvantaged for the purposes of widening access to higher education? *British Journal of Sociology of Education*, 43(3), 349-374. <https://doi.org/10.1080/01425692.2021.2017852>
- Brown, C., Ravallion, M., y Van de Walle, D. (2018). A poor means test? Econometric targeting in Africa. *Journal of Development Economics*, 134, 109-124. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.05.004>
- Campos-Vazquez, R., Huerta, J. E., y Vélez, R. (2012). *Movilidad social en México: Constantes de la desigualdad.* Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
- Campos-Vazquez, R. M., Krozer, A., Ramírez-Álvarez, A. A., De la Torre, R., y Velez-Grajales, R. (2022). Perceptions of inequality and social mobility in Mexico. *World Development*, 151(C), 1-15. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105778>
- Castro, L. K., García, C. H., y López, R. E. (2019). Exclusión social, inclusión política y autoestima de jóvenes en pobreza. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*. XXVI(1), 38-50.
- Castro, R. (2011). Getting ahead, falling behind and standing still. Income mobility in Chile. *Estudios de Economía* 38(1). 243-258.
- Centro de Investigación Económica y Social - Fedesarrollo (2017). *Informe Mensual del Mercado Laboral*. Informe técnico. Editorial Fedesarrollo.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL (2019). *Panorama Social de América Latina 2019*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019#:~:text=EI%20informe%20anual%20de%20la,aras%20de%20una%20mayor%20igualdad>
- Comisión Economía para América Latina y el Caribe CEPAL (2021). *Panorama social de América Latina 2020*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/46687-panorama-social-america-latina-2020>

- Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2018). *Cali en Cifras 2017*. Informe técnico. DANE. <https://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/137803/documentos-cali-en-cifras/genPagdoc1705=2>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2018a). Pobreza Monetaria y Multidimensional en Colombia 2018. DANE. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-y-desigualdad/pobreza-monetaria-y-multidimensional-en-colombia-2018>
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2018b). Pobreza Monetaria Meta Año 2017. DANE. [https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones\\_vida/pobreza/2017/Meta\\_Pobreza\\_2017.pdf](https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2017/Meta_Pobreza_2017.pdf)
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE (2020). *Indicadores Económicos*. DANE. <https://www.dane.gov.co/index.php/67-espanol/servicios-dane/indicadores-economicos>
- Díaz, M. H., Cortés, J. I., Ramos, F., Leiva, J. F., y Dorador, K. (2021). Caracterización inicial de estudiantes en una universidad chilena: Variables de ingreso asociadas a la movilidad social. *Revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho*, 8(1), 347-368. <https://doi.org/10.5354/0719-5885.2021.58181>
- Espinoza, V., Barozet, E., y Méndez, M. L. (2013). Estratificación y movilidad social bajo un modelo neoliberal: El caso de Chile. *Laboratorio*, (25), 169-191. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/laboratorio/article/view/125>
- Flores-Crespo, P., y Rodríguez-Arias, N. (2021). Educación superior tecnológica y movilidad social. Un estudio longitudinal basado en historias de vida. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 12(33), 39-57. <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2021.33.856>
- Foro Económico Mundial (2019). *Informe: Davos 2019: Creación de un futuro compartido en un mundo fracturado*. Editorial Foro Económico Mundial.
- Grusky, D. B., y Kanbur, R. (Eds.) (2006). *Poverty and inequality*. Standford University Press.
- Henseke, G., Anders, J., Green, F., y Henderson, M. (2021). Income, housing wealth, and private school access in Britain. *Education Economics*, 29(3), 252-268. <https://doi.org/10.1080/09645292.2021.1874878>
- Jiménez, M. (2018). La movilidad intergeneracional del ingreso y sus métodos de estimación. Un análisis comparativo para Argentina y Chile. *Cuadernos de Economía*, 41(115), 79-103. <https://doi.org/10.1016/j.cesjef.2017.04.001>
- Katzkowitz, N., Querejeta, M., y Rosá, T. (2021). *Spatial inequalities in educational opportunities: The role of public policies*. Documentos de trabajo en investigación socioeconómica. Banco de Desarrollo de América Latina CAF. <https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1852>
- Leibovich, J., Nigrinis, M., y Ramos, M. (2006). *Caracterización del mercado laboral rural en Colombia*. Informe técnico. Banco de la República. <https://doi.org/10.32468/be.408>
- Lombard, A., y Twikirize, J. M. (2014). Promoting social and economic equality: Social workers' contribution to social justice and social development in South Africa and Uganda. *International Social*



- Work, 57(4), 313-325. <https://doi.org/10.1177/00208728145258>
- Londono, J. (2011). Social mobility, preferences for redistribution and happiness in Colombia. *Desarrollo y Sociedad*, (68), 171-212.
- Long, X., y Ji, X. (2019). Economic Growth Quality, Environmental Sustainability, and Social Welfare in China - Provincial Assessment Based on Genuine Progress Indicator (GPI). *Ecological Economics*, 159, 157-176. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.01.002>
- López, M. D. R. (2009). Efectos de la correspondencia entre educación y empleo de los jóvenes en el mercado de trabajo mexicano. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 14(42), 863-887.
- Lustig, N. (Ed.) (2018). *Commitment to equity handbook: Estimating the impact of fiscal policy on inequality and poverty*. Brookings Institution Press.
- Margitic, J., y Ravallion, M. (2019). Lifting the floor? Economic development, social protection and the developing World's poorest. *Journal of Development Economics*, 139, 97-108. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.03.003>
- Martínez, E. (2017). Ética del desarrollo en un mundo globalizado. *Veritas: Revista de Filosofía y Teología*, (37), 35-50. <https://doi.org/10.4067/s0718-92732017000200035>
- Max-Neef, M. A., Elizalde, A., y Hopenhayn, M. (1998). *Desarrollo a escala humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*. Icaria Editorial S.A.
- Nabudere, D. W. (1997). Beyond modernization and development, or why the poor reject development. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 79(4), 203-215. <https://doi.org/10.1111/j.0435-3684.1997.00019.x>
- Oso, L., Dalle, P., y Boniolo, P. (2019). Movilidad social de familias gallegas en Buenos Aires pertenecientes a la última corriente migratoria: Estrategias y trayectorias. *Papers. Revista de Sociologia*, 104(2), 305-335. <https://doi.org/10.5565/rev/papers.2573>
- Oxfam International (2018). *Índice de compromiso con la reducción de la desigualdad*. Oxfam GB. <https://www.oxfam.org/es/informes/indice-de-compromiso-con-la-reduccion-de-la-desigualdad-cri-2018>
- Peláez, O. A., Gallego, A. M., Arroyave, L. M., y Gaviria, J. L. (2021). Migración como fenómeno social que afecta la educación, la economía y el bienestar integral. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*. XXVII(4), 149-159. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i4.37239>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2018). *Progreso multidimensional: Bienestar más allá del ingreso*. PNUD. <https://www.undp.org/es/honduras/publications/progreso-multidimensional-bienestar-m%C3%A1s-all%C3%A1-del-ingreso>
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD (2019). *Informe sobre Desarrollo Humano 2019. Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI*. PNUD. [https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2019espdf\\_1.pdf](https://hdr.undp.org/system/files/documents/hdr2019espdf_1.pdf)
- Puga, I., y Solís, P. (2010). Estratificación y transmisión de la desigualdad en Chile y México. Un estudio empírico en perspectiva comparada. En J. Serrano y F. Torche (Eds.), *Movilidad social en México: Población, desarrollo y crecimiento* (pp. 189-228). Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

- Raudino, S., y Poletti, A. (Eds.) (2019). *Global Economic Governance and Human Development*. Routledge.
- Rocha, J. J., Julio, J. J., y Semprun, R. Á. (2021). Economía social como alternativa ante una sociedad post coronavirus. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(2), 147-162. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i2.35904>
- Sen, A. (2000). El desarrollo como libertad. *Gaceta Ecológica*, (55), 14-20.
- Sastré, M. L. (2018). Spatial mobility of human development in Mexico. *Desarrollo y Sociedad*, (81), 115-144. <https://doi.org/10.13043/DYS.81.3>
- Savin, N. E., y White, K. J. (1977). The Durbin-Watson test for serial correlation with extreme sample sizes or many regressors. *Econometrica*, 45(8), 1989-1996. <https://doi.org/10.2307/1914122>
- Schoon, I., Burger, K., y Cook, R. (2021). Making it against the odds: How individual and parental co-agency predict educational mobility. *Journal of Adolescence*, 89, 74-83. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2021.04.004>
- Solis, P. (2018). *Barreras estructurales a la movilidad social intergeneracional en México: Un enfoque multidimensional*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/43768-barreras-estructurales-la-movilidad-social-intergeneracional-mexico-un-enfoque>
- Torche, F. (2014). Intergenerational mobility and inequality: The Latin American case. *Annual Review of Sociology*, 40, 619-642. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-071811-145521>
- Uribe, C., y Ramírez, J. (2019). Clase media y movilidad social en Colombia. *Revista Colombiana de Sociología*, 42(2), 229-255. <https://doi.org/10.15446/rcs.v42n2.50749>
- Yaschine, I. (2015). ¿Alcanza la educación para salir de la pobreza? Análisis del proceso de estratificación ocupacional de jóvenes rurales en México. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 60(223), 377-405.
- Zahra, K., Asheaf, A., Zafar, T., y Yaseen, B. M. (2018). Marginality and social exclusion in Punjab, Pakistan: A threat to urban sustainability. *Sustainable Cities and Society*, 37, 203-212. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.11.009>
- Zeng, B. (2018). How can social enterprises contribute to sustainable pro-poor tourism development? *Chinese Journal of Population Resources and Environment*, 16(2), 159-170. <https://doi.org/10.1080/10042857.2018.1466955>